

INFORME SOBRE CONFERENCIAS DEL INSTITUTO BAKER

PUBLICADO POR EL JAMES A. BAKER III INSTITUTE FOR PUBLIC POLICY DE RICE UNIVERSITY



DICIEMBRE DE 2009

MÁS ALLÁ DE LA AUSENCIA DE GUERRA: PAZ Y ESTABILIDAD EN LA AMÉRICA DEL SIGLO XXI PROYECTO DE LAS AMÉRICAS 2009

INTRODUCCIÓN

América enfrenta una combinación de nuevas y viejas amenazas al bienestar, seguridad y convivencia de sus habitantes. Estas presiones van mucho más allá del surgimiento de conflictos armados, y ocasionan importantes divisiones ideológicas y un movimiento hacia gobiernos unilaterales fuertes.

Dada la historia de dictaduras militares, la región aun trata de reconciliar su pasado con el presente. Existen alrededor de 30 conflictos limítrofes sin resolver, y algunos gobiernos, como los de México y Venezuela, han optado por una respuesta de tipo militar para acabar con las tentativas esporádicas y estructuradas cuyo objetivo es desestabilizar el sistema.

En la década de los setenta, la mayoría de los gobiernos de la región estaban en una encrucijada: democracia o dictadura. Los intentos por rechazar décadas de guerras domésticas y enfrentamientos en favor de la democracia resultaron en un generalizado retorno a la forma republicana de gobierno en la década de los años ochenta. En la década más reciente, las regiones lucharon por participar en la economía global en tanto transitaban por procesos muy diferentes en relación a sus instituciones políticas. Si bien algunos países reafirmaron su compromiso con la democracia mediante la transferencia del poder político con presidentes electos constitucionalmente, otras naciones continúan exhibiendo señales de retroceso, consolidando lo que se ha dado en llamar “democracias imperfectas”. El nuevo siglo se caracterizará por un gran desafío: preservar y promover las democracias creadas por los procesos políticos e institucionales durante la década de los ochenta.

En relación con las nuevas amenazas, los países no han logrado impedir la violencia que resulta de las operaciones del contrabando y del crimen organizado, dejando a la vista una verdadera falta de control sobre sus territorios, la ausencia de políticas migratorias y de regulación del comercio, además de la falta de control sobre el uso de armas, tráfico de drogas y legitimación de capitales, entre otras. Actualmente las amenazas a la seguridad nacional se originan dentro de los propios estados.

La capacidad de estos estados –y la calidad de sus democracias– se ve socavada por el terrorismo, el tráfico de drogas, las organizaciones mafiosas y el deterioro del medio ambiente.

Estas variables resultan agravadas por el desarrollo urbano desorganizado en las grandes ciudades de la región, la corrupción, el tráfico de drogas al por menor, la proliferación de armas de fuego, la desigualdad social y la exclusión, y los gobiernos que ofrecen canales inadecuados para los reclamos sociales. El consiguiente aumento de la violencia afecta al bienestar de las comunidades, al dañar el tejido social y deteriorar el capital social, a la vez de representar una amenaza a los derechos humanos.

De acuerdo con *el Informe sobre el Desarrollo Mundial del 2006* publicado por el Banco Mundial, América Latina está entre las primeras regiones del mundo con respecto a la desigualdad de la distribución de ingresos, después de la región del sub-Sahara africano. En la región conviven naciones con altos índices de desarrollo económico y creciente poder militar con otros países que no han consolidado un mínimo funcionamiento adecuado del estado dada la fragilidad de sus instituciones democráticas y del estado de derecho.

El reto para los *fellows* del Proyecto de las Américas 2009, “Más allá de la ausencia de guerra: Paz y estabilidad en la América del Siglo XXI,” consistió en estudiar algunas de estas nuevas amenazas a la seguridad hemisférica que ponen en peligro la coexistencia pacífica entre países y la convivencia dentro de ellos.

Los *fellows* analizaron y debatieron las actuales políticas adoptadas por los gobiernos nacionales y las organizaciones internacionales, con el propósito de identificar las acciones que la sociedad civil, los gobiernos nacionales y las organizaciones internacionales podrían emprender para superar estos desafíos multidimensionales a la seguridad. El simposio proporcionó el escenario para que los *fellows* escuchasen de primera mano las experiencias de los diferentes países, intercambiasen ideas y las debatiesen, y propusiesen recomendaciones. A continuación se presenta el resumen de los debates de los *fellows* sobre el rol de las organizaciones internacionales, los gobiernos y la sociedad civil en promover y preservar la paz.

EL PAPEL DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL, ESPECÍFICAMENTE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, APOYANDO Y SALVAGUARDANDO LA PAZ EN EL HEMISFERIO

La Organización de los Estados Americanos (OEA) es el principal foro regional para el diálogo y el consenso político. Por consiguiente, nuestra discusión sobre el rol de las organizaciones internacionales en promover y construir la paz se enfoca en la OEA.

En América, la OEA representa la idea de una unidad regional con propósitos comunes, en particular en lo que concierne a la democracia y la paz. Este objetivo, que ha sido la razón de ser de la OEA desde su creación, ha existido desde el siglo diecinueve. Dado que los conceptos de democracia y paz se han modificado a lo largo del tiempo, el trabajo de la OEA se ha volcado hacia el fortalecimiento de las instituciones que sostienen la democracia y promueven una paz sostenible en la región a través del respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Los principios democráticos fundamentales que promueve la OEA incluyen: el acceso a y el ejercicio del poder de acuerdo con el estado de derecho; la celebración periódica de elecciones libres e imparciales

basadas en el voto secreto y el sufragio universal como expresión de la soberanía de los pueblos; un sistema pluralista de partidos políticos y organizaciones; la división y la independencia de los tres poderes del estado; y la transparencia de las actividades del gobierno. Por último, los gobiernos también deben ser administradores públicos responsables que respeten los derechos sociales y las libertades de expresión y de prensa; la subordinación constitucional de todas las instituciones del estado a la autoridad civil legalmente constituida; y el respeto del estado de derecho por parte de todas las instituciones y sectores de la sociedad.

Actualmente, la OEA puede describirse como un foro para el diálogo político principalmente centrado en la democracia y la paz. La organización usa recursos variados para promover la democracia en la región. Estos incluyen: misiones de observación electoral (http://www.oas.org/sap/espanol/cpo_cooperacion_observacion.asp); la Convención Interamericana Contra la Corrupción (<http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-58.html>); el fortalecimiento de los poderes legislativos y los partidos políticos; y la protección de las instituciones democráticas mediante la identificación y el análisis de los riesgos potenciales o reales para la democracia. La OEA también ayuda a los países miembros a prevenir, manejar o resolver crisis, y a superar interrupciones en las prácticas democráticas. El Fondo de Paz de la OEA facilita la resolución pacífica de los conflictos. Un ejemplo específico de un esfuerzo altamente exitoso en esta área es la conversación que actualmente auspicia la OEA entre Belice y Guatemala en relación a una disputa territorial.

Fortalezas y debilidades de la OEA

La OEA es reconocida por apoyar el uso de medios pacíficos para la resolución de conflictos y controversias, y por su trabajo en promover y mejorar la democracia. En este sentido, es importante mencionar que los observadores electorales de la OEA han resultado ser una herramienta legítima de preservación de la democracia en toda la región.

A lo largo de toda su existencia, la OEA no dejó de luchar por su misión fundamental de promover la democracia y la paz en la región. Si bien esto resulta positivo en muchos aspectos, también ha generado restricciones en el desempeño de la organización. Por ejemplo, el principio de no intervención limita las

posibilidades de hacer uso de la diplomacia preventiva y la intervención oportuna para evitar el conflicto, cuando los países eligen no pedir ayuda a la OEA. En otras palabras, la OEA no puede actuar ni intervenir a menos que el país o los países involucrados se lo requieran.

Una fortaleza clave de la OEA la encontramos en las diversas experiencias de sus estados miembros, entre ellas, las lecciones aprendidas y las mejores prácticas que puedan obtenerse de esas experiencias. Sin embargo, muchas de estas lecciones y mejores prácticas aun no han sido documentadas debido a la falta de recursos –un continuo desafío para la organización.

El cuidado puesto por la OEA en la toma de decisiones por consenso constituye tanto una fortaleza como una debilidad. El consenso es deseable porque las decisiones son respaldadas en su totalidad por cada uno de los estados miembros. Sin embargo, también es una desventaja porque alcanzar un acuerdo de esa índole es un desafío. Es un proceso que demanda tiempo y manejos políticos, potencialmente retrasando acciones y medidas.

Otra debilidad de la institución es la falta de comunicación efectiva con los ciudadanos de los estados miembros. A lo largo de todo este debate, se hizo evidente que había muchas diferencias de percepción en relación a la influencia que pudiesen tener algunos países miembros de la OEA. La realidad es que, más allá de su tamaño o poder económico, cada país tiene un voto. Esta idea errónea de desigualdad de poder, junto con otras ideas que se pusieron de manifiesto durante nuestro simposio, muestra la falta de un conocimiento general y de información fuera de la organización y entre los ciudadanos de los estados miembros acerca del rol de la OEA.

Si bien los estados son la esencia de la OEA, la organización también incluye a otros participantes clave, como por ejemplo la sociedad civil –grupos de la comunidad y otras organizaciones no gubernamentales. La OEA ha generado el espacio para que la sociedad civil se involucre en asuntos críticos de la agenda interamericana y participe de las iniciativas establecidas por la Asamblea General. Así mismo, facilita oportunidades de diálogo y establece mecanismos para que la sociedad civil tome parte en foros políticos, ejecución de proyectos, cooperación horizontal, y en el desarrollo de programas de alianzas

o asociaciones. También promueve que se compartan experiencias e información, en un esfuerzo por lograr que la formulación de políticas públicas tenga en cuenta las necesidades y las realidades de las sociedades americanas. Hasta ahora, es muy poco lo que se dice o lo que se conoce del trabajo de la OEA en este frente. Por consiguiente, la organización necesita difundir más información acerca de sus actividades y disponer de mejores mecanismos de divulgación.

Hacia adelante: Propuestas a futuro para la OEA

Como se discutió anteriormente, si bien el principio de la no intervención restringe el rol de la OEA, no necesariamente le imposibilita la diplomacia proactiva. La OEA podría, por ejemplo, focalizarse en la diplomacia preventiva desarrollando mecanismos que permitan llevar a cabo intervenciones oportunas y preventivas. Una mejor gestión de la información podría facilitar sistemas de advertencia temprana tanto para la Secretaría General de la OEA como para sus países miembros. Pero otra alternativa podría consistir en la formalización de una respuesta ante crisis/mediación de un grupo asesor de notables/ de personalidades eminentes, que pueda intervenir con eficacia y de modo oportuno cuando se enfrente una crisis o se medie en un conflicto; o una opción podría ser la creación de una lista de expertos técnicos civiles de respuesta y despliegue rápidos en casos de mediación o prevención de crisis.

Como uno de los foros más destacados de diálogo político de la región, la OEA también tiene un importante potencial para intervenir y mejorar los mecanismos políticos y regionales de promoción y construcción de la paz. La OEA podría por ejemplo documentar y difundir las lecciones extraídas de sus propias experiencias y de las experiencias de otras organizaciones, así como también fortalecer la experiencia técnica de su personal en cuestiones de mediación y negociación. De la misma manera, la OEA podría proporcionar a sus estados miembros actividades de capacitación y compartir con ellos las mejores prácticas con el propósito de fomentar la diplomacia preventiva y la mediación.

Por otra parte, la OEA podría trabajar con instituciones pertinentes, que incluyen comités de expertos en políticas (*policy think tanks*) y universidades, para encargar estudios sobre cuestiones específicas relacionadas con la promoción

y construcción de la paz en América. Sería el caso de los estudios temáticos que trascienden a los países particulares, y van más allá de las controversias y los conflictos –por ejemplo, las lecciones aprendidas y las mejores prácticas en relación a la colaboración de la sociedad civil con los gobiernos para impulsar la prevención de conflictos y promover la construcción de la paz en la región.

La OEA también podría procurar el fortalecimiento y la formalización de sus relaciones con otras organizaciones internacionales que trabajan para la construcción de la paz en la región –específicamente, las Naciones Unidas.

De la misma manera, la OEA podría en forma activa tratar de atraer a otros protagonistas clave, como por ejemplo al sector privado, para la promoción de la paz. La OEA podría asimismo ampliar las iniciativas existentes tales como el Foro del Sector Privado de la OEA, para potenciar el intercambio de ideas e iniciativas que procuren objetivos de crecimiento económico, prosperidad y reducción de la pobreza en el hemisferio, y que complementen las acciones emprendidas por los estados miembros de la OEA y las instituciones de desarrollo. De la misma manera, debería continuar dando pasos hacia una mayor participación en iniciativas relacionadas con la responsabilidad social de las empresas, focalizándose en construir capacidades locales y colaborando con múltiples grupos. Finalmente, la OEA debería continuar apoyando las políticas que aumentan la responsabilidad gubernamental y el acceso a la información pública con el propósito de combatir la corrupción en el sector público y promover la honestidad en el hemisferio.

En conclusión, el fortalecimiento de la paz y la seguridad, la prevención de los conflictos y la resolución de las disputas están entre los propósitos esenciales de la OEA, tal como se establece en su carta fundacional (http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-41_Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americanos.htm). Sin embargo, las amenazas a la paz en el Siglo XXI surgirán en muchas y diferentes formas. Más allá de promover las relaciones de amistad dentro de la región, la OEA debería focalizarse en lograr una convivencia social pacífica y democrática, promoviendo el progreso social y material, la eliminación de las desigualdades, el manejo apropiado de los problemas asociados con desastres naturales

y pandemias, y la contención o erradicación de la corrupción, el delito y la violencia.

EL PAPEL DEL GOBIERNO EN LA PROMOCIÓN Y PRESERVACIÓN DE PAZ

La promoción y la preservación de la paz a través de políticas y acciones estratégicas representan tanto objetivos como desafíos para muchas sociedades del Hemisferio Occidental. La resolución de conflictos internos e interregionales requiere de la cooperación entre los ciudadanos de los países y de una revisión de las instituciones que proporcionan educación, empleo y seguridad. Es particularmente importante para los gobiernos prestar atención a las prácticas de mantenimiento del orden público.

La policía: El protagonista gubernamental más destacado

Los países de América Latina y el Caribe por lo general tienen sistemas de policía nacional o provincial. Cada uno de estos sistemas tiene sus ventajas y sus desventajas. La policía a nivel nacional, el sistema más común en la región, se encuentra en países como Colombia. La dirección de la fuerza policial, por lo general el jefe de la policía, supervisa las operaciones de los agentes de policía y tiene a cargo su capacitación básica. Este enfoque sugiere que los agentes están mejor controlados y los procesos y procedimientos están estandarizados. Como contrapartida, los sistemas provinciales de policía, como en los casos de Brasil y Argentina, tienden a estar altamente aislados dado que cada provincia o municipalidad se maneja en forma independiente, y por consiguiente, no hay estandarización de las operaciones a lo largo de todo el país.

Cualquiera sea el sistema, la confianza en los agentes de la policía y el respeto hacia ellos ha disminuido considerablemente por parte de la ciudadanía, principalmente debido a los muchos escándalos de corrupción con los que han estado vinculados. Es fundamental que los ciudadanos tengan confianza en sus fuerzas policiales. Por lo que se hacen necesarias iniciativas específicas para recuperar el respaldo a estas fuerzas y la confianza en las mismas como fuente de seguridad.

La remuneración y los beneficios proporcionados a la policía deberían ser reevaluados, para motivar a los

oficiales y rectificar el desequilibrio entre los riesgos del trabajo y los sueldos. Esto daría una señal de que la policía y la profesión como tal, son valoradas por parte de los ciudadanos y son dignas del respeto social. Sin embargo, los gobiernos deben también garantizar que las fuerzas policiales estén equipadas y dispongan de recursos para proporcionar a los ciudadanos la seguridad y el servicio que ellos requieren y así llegar a ser verdaderas defensoras de las personas. El Salvador, por ejemplo, enfrenta el desafío de la insuficiencia de recursos para mantener una fuerza policial que pueda considerarse digna. Es por ello que el equipamiento de la policía y la disponibilidad de recursos constituyen una prioridad gubernamental.

Como se destacó con anterioridad, la falta de confianza en los agentes de la policía prevalece en la región. Para mejorar esta situación, se necesita una policía incólume. Por lo que la reconsideración de los sueldos de la fuerza policial es crucial. En algunos lugares, los sueldos son tan bajos que muchos policías caen fácilmente en la tentación de aceptar sobornos. Además es fundamental que los agentes de la policía reciban capacitación adecuada. Son varios los incidentes de abuso de poder y violación de los derechos humanos por parte de policías. En países como Bolivia y Ecuador, los ciudadanos sostienen que hay un desequilibrio en el uso de la fuerza, y que desearían un sistema más democrático. Como tal, los derechos humanos deberían ser garantizados a todos los ciudadanos, y los agentes de la policía deberían ser educados para disminuir/eliminar la violación de estos derechos. En este marco, el diálogo es importante para forjar mejores relaciones entre los ciudadanos y las fuerzas policiales. En Nicaragua, el modelo de policía comunitaria o policía de proximidad ciudadana demostró ser un método eficaz de incorporación de los ciudadanos a las iniciativas policiales. Este enfoque, en conjunto con los foros de discusión con los ciudadanos, es esencial para incrementar la conciencia sobre los motivos de queja de los ciudadanos y descubrir las posibles soluciones. De esta forma, el gobierno y la fuerza policial estarán en mejor capacidad para reducir los conflictos sociales.

La transformación del sistema de justicia penal constituye otro punto central. El sistema policial no puede estar aislado del sistema de justicia penal. Es necesario que los gobiernos garanticen que tanto el sistema penal como el sistema penitenciario funcionen

con eficacia y estén adecuadamente alineados con las fuerzas policiales. En países como Costa Rica, donde prevalecen los servicios privados de protección, resulta importante formar asociaciones con otras instituciones para garantizar una sociedad pacífica.

Otras acciones gubernamentales

Los gobiernos también deben proponerse educar a sus propios ciudadanos en una cultura de paz. Por consiguiente, los países de la región necesitan incluir un espacio de educación sobre democracia y derechos humanos. Los docentes también deberían ser capacitados en resolución de conflictos.

Las sociedades civiles y los gobiernos deberían colaborar y llegar a ser más proactivos con las iniciativas de alivio de la pobreza. Por lo general, las altas tasas de desempleo resultan en un aumento de la pobreza, lo cual altera la estabilidad de un país. En países de habla inglesa del Caribe tales como Trinidad y Tobago, Bahamas y St. Kitts, además de algunos países de América Latina, el alivio de la pobreza es crítico para combatir las crecientes tasas de delincuencia. En Argentina, los movimientos de la sociedad civil constituyen una parte esencial para el sostenimiento de las personas de bajos ingresos, proporcionando refugio a las personas sin techo y organizando campañas de alimentación. En países como Nicaragua y Canadá, la sociedad civil promueve la paz mediante la incorporación de mejores prácticas internacionales en los programas de reducción nacional de la pobreza, con el asesoramiento de organizaciones internacionales afines. Algunas de estas organizaciones internacionales incluyen UNICEF, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Por consiguiente, resulta crucial que los gobiernos, así como otros actores sociales, utilicen estas iniciativas. La discriminación racial y la violencia doméstica son otros ejemplos de enfermedades sociales que pueden obstaculizar el proceso de paz. Sería beneficioso examinar la violencia desde instituciones más pequeñas, como por ejemplo la familia. En consecuencia, resulta imperativo un foro que facilite y aliente el debate abierto sobre estas importantes cuestiones.

EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL: LA PAZ COMO OBJETIVO COMÚN

Los cambios en la naturaleza de los conflictos demuestran que las respuestas tradicionales basadas en la doctrina de la seguridad nacional no resultan suficientes. Existe la necesidad de una respuesta articulada que tome en consideración las expresiones organizadas del gobierno y la sociedad, en particular en relación con los esfuerzos preventivos para reducir el impacto de la violencia en las vidas cotidianas de los ciudadanos, y en especial en las poblaciones altamente vulnerables.

La falta de seguridad, que resulta en la pérdida de vidas y bienes, es uno de los problemas que más afectan la calidad de vida de una nación, socavando la vida pública y los derechos de sus ciudadanos.

Los objetivos de seguridad de los estados se logran con más facilidad a través del fortalecimiento de redes de convivencia democrática en áreas específicas, más que por la aplicación convencional del poder de los estados. Esta transformación abre la puerta para que la sociedad civil asuma un rol más importante en el establecimiento y la consolidación de la paz. En Argentina, por ejemplo, hay grupos de madres que administran comedores para niños. En Canadá, las organizaciones civiles juegan un importante papel en el funcionamiento de bancos de alimentos y refugio para las personas sin techo.

El carácter heterogéneo de América no permite que se alcance un consenso en lo que significa que la sociedad civil sea parte interesada en cuestiones de paz. Los procesos históricos de desarrollo y consolidación del “estado nación,” el sistema político y el estado de derecho hacen que estas organizaciones civiles tengan, por definición, un amplio alcance y sean multifacéticas en sus intereses, recursos, socios, movilización, afiliación, y financiamiento.

No obstante lo señalado, se da por hecho que la sociedad civil interviene en cuestiones de promoción de paz, y lo hace en razón de la incapacidad de las instituciones tradicionales para resolver o enfrentar adecuadamente los conflictos sociales y políticos que afectan el bienestar de las poblaciones. Estas organizaciones civiles, que en principio están más cerca a las realidades de sus comunidades, actúan de conformidad con las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos. Su propósito

es fomentar la conciencia, educar y organizar a los ciudadanos para movilizarse con el propósito de generar espacios seguros, libres de violencia. También procuran influenciar la toma de decisiones políticas, y en algunos casos, proteger y defender a aquellas personas cuyas libertades y derechos políticos y civiles sean ignorados por el estado. Por lo tanto, en sociedades que están gravemente afectadas por trastornos sociales, como por ejemplo aquellos relacionados con períodos post-conflicto, la sociedad civil apoya los esfuerzos de mediación y reconciliación para restablecer la paz social y la gobernabilidad mediante la creación de nuevos espacios para la convivencia.

En Colombia, los acuerdos de paz con el M-19, un grupo guerrillero que se desmovilizó en 1990, ejemplifica la inclusión de previsiones en relación a la participación de la sociedad civil. La creación de las mesas de trabajo, en las que participaron los diferentes sectores de la sociedad colombiana, constituye un ejemplo de las actividades en las cuales tomaron parte las organizaciones de la sociedad civil. A mediados –y fines– de los noventa, los representantes de la sociedad civil participaron en el proceso que acompañó los intentos de alcanzar un acuerdo de paz con el ELN, otra organización guerrillera que aun no se ha desmovilizado. De manera similar, los intentos de alcanzar un acuerdo de paz con las FARC, otro grupo insurgente, incluyó la participación de los representantes de la sociedad civil durante las conversaciones de paz.

El hecho que activa y justifica la participación de la sociedad civil es la necesidad de mejorar las condiciones de convivencia o coexistencia entre las personas, que son parte de una desordenada “guerra urbana”, la cual prospera con la desigualdad, la pérdida de identidad, la ausencia de una visión de futuro y de un proyecto de vida de los jóvenes y con un estado que no satisface adecuadamente las necesidades básicas de la población.

Es en la prevención, la denuncia y el control que la sociedad civil debe jugar su rol, y nunca en la dimensión represiva de la seguridad. Debe apoyar el diálogo y la educación en conjunto con el trabajo de los gobiernos centrales y locales. En El Salvador, la sociedad civil fue un protagonista activo en denunciar las violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil en el país, buscando y ofreciendo ayuda humanitaria a los excluidos y los refugiados, buscando

a los desaparecidos, exigiendo justicia, construyendo alternativas de vida para los huérfanos y las víctimas del conflicto a través de iniciativas económicas, orientación, apoyo material y educación.

Áreas de trabajo

Una de las principales preocupaciones es la sostenibilidad de los esfuerzos llevados a cabo por la sociedad civil para mantener la paz y encauzar con firmeza las áreas estructurales del conflicto social. En este sentido, ha habido propuestas de institucionalizar la participación social en todas las fases del proceso de desarrollo de la política pública. Estos esfuerzos impulsan la adopción de estrategias locales de trabajo cuando se trata de factores de riesgo tales como el desempleo, el abandono de la escuela, los espacios públicos, la proliferación descontrolada de armas de fuego, el abuso del alcohol y el consumo de psicofármacos.

En el caso de Nicaragua, las organizaciones de la sociedad civil han servido para financiar la construcción y la administración de un gran número de escuelas de educación primaria en comunidades a las que el estado no ha sido capaz de llegar. Esto ha tenido lugar también con los programas de nutrición de niños (por ej., PROCOSAN o Programas de Acción Comunitaria de Salud y Nutrición), y otros esfuerzos tales como la Red de Protección Social, PAINIM, y el programa nacional de protección frente al VIH. La sociedad civil ha sido visiblemente dinámica y proactiva en generar diagnósticos y aportaciones para la toma de decisiones, además de encontrar las claves necesarias para articular un mensaje claro, simple y pedagógico que conduzca a la movilización.

La construcción de redes (*networking*) es crucial, y está vinculada al proceso de generación de confianza. Durante años, los dictadores latinoamericanos procuraron dismantelar toda clase de movimiento, y esto resultó en que muchos de los protagonistas y grupos comunitarios de la sociedad trabajasen en forma individual y desconfiasen el uno del otro. Las redes o *networking* promueven el entendimiento, el cual abre un espacio para el debate y desarrollo de una agenda común. Esto posibilita que las organizaciones comunitarias enfrenten temas que de otra manera no serían abordados abiertamente, como la explotación sexual de menores, el tráfico de personas y el tráfico de drogas.

Un ejemplo exitoso de redes lo podemos encontrar en Costa Rica, donde la comunidad estableció comités locales para fomentar el bienestar y la seguridad. Los comités determinan las necesidades locales de seguridad e implementan medidas apropiadas usando un proceso de cuatro pasos:

1. Diagnóstico de factores de riesgo y planificación
2. Coordinación y desarrollo de una base de datos
3. Descentralización e intercambio de experiencias y mejores prácticas
4. Difusión y movilización a través de campañas de concientización, y agrupación de las partes en conflicto

Los comités también buscan la consolidación de la paz a través de los valores y cambios culturales basados en la promoción del estado de derecho, los programas de educación para la paz y la educación de los ciudadanos sobre sus derechos y obligaciones.

Con el propósito de lograr la confianza, la sociedad civil debe consolidarse como un tercer sector a través del desarrollo de asociaciones y redes de confianza. Parte del desafío reside también en mantener la transparencia en las acciones, junto con la responsabilidad. Algunas de las sospechas que continúan surgiendo en torno de las organizaciones de la sociedad civil se basan en su dependencia financiera de la comunidad internacional, dando lugar a inquietudes respecto a la falta de imparcialidad en sus actividades.

El desafío que tiene la sociedad civil es que se la visualice como la base de consolidación de una democracia más sólida, fuente de confianza y eje de integración social. Hay una conexión estrecha entre esta ambición –el ejercicio de los derechos ciudadanos– y el desarrollo. Todo esto marcha al tiempo con el reconocimiento de que los temas de la paz y la seguridad son cruciales para los estados democráticos y para sus ciudadanos, quienes exigen estos derechos.

RECONOCIMIENTOS

Los *fellows* del Proyecto de las Américas 2009 fueron Agustín Romero (Argentina), Elsworth Johnson (Bahamas), Violeta van der Valk (Bolivia), Juliana Barroso (Brasil), Alexandre Côté (Canadá), Ángela

